



OSCAR EDUARDO GARCÍA GALLEGO

Abogado

Derecho Público

Señor(es)

JUZGADOS ADMINISTRATIVOS DEL CIRCUITO (REPARTO)

Guadalajara de Buga

REFERENCIA:

DEMANDA

MEDIO DE CONTROL:

REPARACIÓN DIRECTA

DEMANDANTES:

LEONEL SANTO ANGULO ACEBEDO, MAURICIO ANGULO PALACIOS, LEONEL ANGULO PALACIOS, NURYS TIQUE CARDOZO, MARIA JUDITH ACEVEDO DE ANGULO, ESPIRITU SANTO ANGULO POTES, HAROLD ANGULO ACEVEDO, y JACQUELINE ANGULO VIVAS

DEMANDADOS:

NACIÓN – RAMA JUDICIAL y NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN

OSCAR EDUARDO GARCIA GALLEGO, abogado litigante y en ejercicio de su profesión identificado civil y profesionalmente con la cedula de ciudadanía número 14.799.840 expedida en Tuluá Valle, y la tarjeta profesional Nro. 174.532 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura y **CATHERINE MEJIA BEDOYA**, abogada litigante y en ejercicio de su profesión identificada civil y profesionalmente con la cedula de ciudadanía número 1.115.064.933 expedida en Buga Valle, tarjeta profesional Nro. 211.561 expedida por el Consejo Superior de la Judicatura, obrando en condición de representantes Judiciales de los señores, LEONEL SANTO ANGULO ACEBEDO (demandante afectado), MAURICIO ANGULO PALACIOS (Hijo), LEONEL ANGULO PALACIOS (Hijo), NURYS TIQUE CARDOZO (compañera), MARIA JUDITH ACEVEDO DE ANGULO (Madre), ESPIRITU SANTO ANGULO POTES (Padre), HAROLD ANGULO ACEVEDO (Hermano), y JACQUELINE ANGULO VIVAS (Hermana); de acuerdo al poder otorgado, acudimos a esta Honorable Corporación para que inicie y lleve hasta su terminación proceso **MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA**, consagrado en el artículo 140 del C.P.A.C.A., en contra de la **NACION- RAMA JUDICIAL y NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN**, con la citación del señor Procurador Judicial delegado para esa Corporación y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, a efectos de que las entidades demandadas sean declaradas administrativamente responsables de los daños y perjuicios ocasionados a mis representados, derivados de la privación injusta de la libertad de que fue víctima el señor LEONEL SANTO ANGULO ACEBEDO por un espacio de más de seis (6) meses, con base en los siguientes,

HECHOS

1. En fecha 25 de diciembre de 2013, la policía Judicial en la ciudad de Buga, fue informada sobre una persona herida de gravedad que correspondía al nombre de Liceth Valentina Cueno Gómez.
2. En la indagación de los hechos por parte de la Policía Judicial, se tomó entrevista al señor Julián Andrés Gutiérrez Restrepo y al señor Alejandro Llanos Zúñiga, quienes manifestaron que el demandante, LEONEL SANTO

Carrera 14 No. 4-80 Oficina 11 - Celular 3182915384

Guadalajara de Buga

E-mail: oscar_garcia_84@hotmail.com



OSCAR EDUARDO GARCÍA GALLEGO

Abogado

Derecho Público

ANGULO ACEBEDO y su hijo, iban en una moto y en la búsqueda de Julián Andrés Gutiérrez y al no encontrarlo y confundirlo le dispararon a la joven Liceth Valentina huyendo del lugar.

3. Ante tales situaciones y dada la materialidad de la conducta punible (*Homicidio en Grado de Tentativa en concurso con porte ilegal de armas de Fuego o Municiones con el agravante de hacer tal conducta en medio motorizado*), por parte de la Fiscalía General de la Nación a través de su delegada el 4 de febrero de 2014, solicita ante el Juez Quinto de Control de Garantías de Buga la captura del actor, la cual se materializo el día 20 de marzo de 2013.
4. En dicha fecha y ante el Juez Tercero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Buga, por parte de la Fiscalía 10 Seccional se presentó solicitud de audiencia preliminar a efectos de legalizar la captura del demandante, formular imputación e imposición de la medida de aseguramiento.
5. El demandante dentro de este medio de Control no acepto los cargos imputados por la Fiscalía dentro del número único de noticia criminal **761116000165201302571**, y por parte del Juez de Control de Garantías, se impuso la medida de aseguramiento solicitada por parte de la Fiscalía General de la Nación en establecimiento Carcelario.
6. La Fiscalía Decima Seccional de esta ciudad presento escrito de acusación en contra del poderdante, correspondiendo el conocimiento de tales diligencias al Juzgado Segundo Penal del Circuito, diligencia que se realizó el 13 de junio de 2014.
7. Evacuadas la audiencia preparatoria en fecha 15 de julio de 2014, e iniciado el juicio oral (6 de agosto de 2014), en la audiencia de fecha 9 de octubre de ese mismo año, se cerró el debate probatorio, se escucharon los alegatos de cierre y por parte de la Juez Segunda Penal del Circuito se profirió sentido de Fallo absolutorio, otorgándose la libertad inmediata del señor Leonel Santo Angulo Acebedo, programándose para el 16 de diciembre de 2014, audiencia de lectura de fallo.
8. En la audiencia de lectura de fallo (16 de diciembre del 2014), la Juez procedió a emitir la sentencia No. 129, en la cual, luego de valorar las pruebas arrojadas al juicio oral junto con los testigos que depusieron tanto de cargo como de descargo en sus directos y re-directos, se declaró como *no responsable* al actor de los señalamientos de la Fiscalía General de la Nación como autor de los delitos por los que había sido acusado, según las consideraciones de la Juez de Instancia, no hubo una correcta sindéresis en la acusación con pruebas que permitieran inferir responsabilidad del demandante, sino que se trajo al juicio posibles hipótesis de la ocurrencia de un hecho, dado que tan siquiera hubo una correcta correlación en las entrevistas tomadas por los miembros de la policía judicial, que nunca dieron certeza sobre la presunta comisión de la conducta endilgada al señor LEONEL SANTO ANGULO ACEBEDO.



OSCAR EDUARDO GARCÍA GALLEGO

**Abogado
Derecho Público**

9. Así las cosas, y ante tales consideraciones que devinieron en la libertad del señor ANGULO ACEBEDO, se configuro en contra de la administración, esto es, Nación- Rama Judicial y Nación- Fiscalía General del Nación, la obligación a resarcir los perjuicios y daños materiales e inmateriales causados a los demandantes con ocasión a la privación injusta de la libertad de que fue objeto el actor, pues como tal no estaba obligado a soportar la carga de estar más de 6 meses privado de su libertad, con ocasión a las falencias investigativas del organismo encargado de llevar el ejercicio de la acción penal.
10. Perjuicios morales y materiales que no solo sufrió el actor por estar privado de su libertad, sino su núcleo familiar conformado por sus padres, compañera, hermanos e hijos, pues se vieron privados de la presencia de la persona, que en libertad suplía con su trabajo las necesidades económicas del hogar y con su presencia daba compañía y regocijo a su familiares dadas las relaciones apoyo mutuo dentro de la Familia del actor.
11. Es por ello que se presenta el medio de control de la referencia con el objeto de que las entidades demandadas sean declaradas responsables de los perjuicios de índole material y moral que sufrió el actor, Leonel Santo Angulo Acebedo y sus familiares con ocasión a la injusta privación de la libertad de la que fue objeto desde el 20 de marzo de 2014 hasta el 9 de octubre del 2014, fecha en que fue emitido el sentido de fallo absolutorio a favor del actor y que ordeno su libertad inmediata, dada la ausencia de responsabilidad penal en las conductas punibles por las cuales fue acusado.
12. El demandante, LEONEL SANTO ANGULO ACEBEDO antes de ser privado de la libertad, se dedicaba a comercializar material de río, como arena y balastro, haciendo viajes en un vehículo tipo volqueta que era de su propiedad de placas NVB-075, los cuales le generaban unos ingresos promedio mensuales de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 2.500.000.00), actividad que con ocasión a la detención injusta no pudo seguir desarrollando, lo cual era el sustento suyo y de su familia.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Artículos 2 y 90 de la Constitución Nacional; Artículos 140, 164 numeral 2, literal i y 211 de la Ley 1437 del 18 de enero de 2011, CODIGO DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO y DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO; Artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, CODIGO GENERAL DEL PROCESO; Artículos 65 y siguientes de la Ley 270 de 1.996.

El legislador al dictar el Estatuto Orgánico de la Administración de Justicia, Ley 270 de 7 de marzo de 1996, vigente para la fecha de los hechos demandados, previó la responsabilidad patrimonial del Estado causada por la acción u omisión de los Agentes Judiciales, indicando que debería responder en tres situaciones:

- La primera: por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia.
- La segunda: por el error jurisdiccional y



- La tercera: por la privación injusta de la libertad.

Al respecto en providencia de Unificación de la Sección Tercera expediente **23354** Sobre Privación Injusta de la Libertad se expresó:

2.3.1 La jurisprudencia de la Sección Tercera del Consejo de Estado en la materia.

2.3.1.1 Previamente a examinar los parámetros que gobiernan la responsabilidad del Estado frente a supuestos como el del presente caso concreto, resulta menester precisar que la demanda mediante la cual se dio inicio a este encuadramiento tiene por objeto la declaratoria de la responsabilidad patrimonial del Estado por razón de la privación injusta de la libertad a la cual habría sido sometido el señor Luis Carlos Osorio Orozco, desde el 30 de junio de 1992 hasta el 22 de agosto de 1995, con lo cual se evidencia que los hechos que se someten a conocimiento de la Sala ocurrieron en vigencia del artículo 414 del antiguo Código de Procedimiento Penal —Decreto Ley 2700 de 1991—, esto es antes de la expedición de la Ley 270 de 1996.

La Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y de establecer los alcances del mencionado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991¹; en efecto, la jurisprudencia a este respecto se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha puesto de presente².

En una primera etapa la Sala sostuvo que la responsabilidad del Estado por la privación injusta de la libertad de las personas se fundamentaba en el error judicial que se produce como consecuencia de la violación del deber que tiene toda autoridad jurisdiccional de proferir sus resoluciones conforme a derecho, previa una valoración seria y razonable de las distintas circunstancias del caso y sin que resultare relevante el estudio de la conducta del respectivo juez o magistrado, a efecto de establecer si la misma estuvo acompañada de culpa o de dolo³. Bajo este criterio, la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva, ordenada con el lleno de los requisitos legales, se tenía como una carga que todas las personas tenían el deber jurídico de soportar⁴.

Más adelante, en una segunda dirección, se indicó que la carga procesal de demostrar el carácter injusto de la detención con el fin de obtener la indemnización de los correspondientes perjuicios —carga consistente en la necesidad de probar la existencia del error de la autoridad jurisdiccional en el cual habría incurrido al ordenar la medida de aseguramiento privativa de la libertad— fue reducida solamente a los casos en los cuales la exoneración de responsabilidad penal se hubiere producido con apoyo en circunstancias o en argumentos diferentes de los tres supuestos expresamente mencionados en la segunda frase del multicitado artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991⁵, pues en relación con los tres eventos señalados en esa norma se estimó que la ley había calificado de antemano que se estaba en presencia de una detención injusta⁶, lo cual se equiparó a

¹ El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente:

“Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave”.

² Sentencia del 4 de diciembre de 2006, exp. 13.168; sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. No. 15.463.

³ Sentencia del 30 de junio de 1994, exp. 9734.

⁴ Sentencia del 25 de julio de 1994, exp. 8.666.

⁵ Otros casos de detención injusta, distintos de los tres previstos en el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal, podrían ser, por vía de ejemplo, los siguientes: detención por delitos cuya acción se encuentra prescrita; detención por un delito que la legislación sustrae de tal medida de aseguramiento; detención en un proceso promovido de oficio, a pesar de que el respectivo delito exigiere querrela de parte para el ejercicio de la acción penal, etc.

⁶ Sentencia del 17 de noviembre de 1995, exp. 10.056.



un tipo de responsabilidad objetiva, en la medida en que no resultaba necesario acreditar la existencia de una falla del servicio⁷.

En tercer término, tras reiterar el carácter injusto atribuido por la ley a aquellos casos enmarcados dentro de los tres mencionados supuestos expresamente previstos en el artículo 414 del hoy derogado Código de Procedimiento Penal, la Sala añadió la precisión de que el fundamento de la responsabilidad del Estado en tales tres eventos no derivaba de la antijuridicidad de la conducta del agente del Estado, sino de la antijuridicidad del daño sufrido por la víctima, en tanto que ésta no tiene la obligación jurídica de soportarlo⁸, de suerte que tal conclusión se adoptaría independientemente de la legalidad o ilegalidad de la decisión judicial o de la actuación estatal o de que la conducta del agente del Estado causante del daño hubiere sido dolosa o culposa⁹.

*Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente con base en un título objetivo de imputación, a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación, dentro del proceso penal respectivo, **del principio in dubio pro reo**, de manera tal que aunque la privación de la libertad se hubiere producido como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso cuando se hubiere proferido la medida de aseguramiento con el lleno de las exigencias legales, lo cierto es que si el imputado no resulta condenado, se abre paso el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado, de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos –cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la respectiva medida de aseguramiento¹⁰–.*

2.3.1.2 *El fundamento de la responsabilidad del Estado en estos eventos, por tanto, no debe buscarse –al menos no exclusivamente– en preceptos infraconstitucionales que pudieran limitar los alcances de la cláusula general de responsabilidad del Estado contenida en el artículo 90 superior; tal fue el argumento que la Sala, indiscutidamente, acogió con el propósito de justificar tanto la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad en eventos diversos de los contemplados expresamente en el citado artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 –como, por ejemplo, en los casos en los cuales se produce la exoneración de responsabilidad penal en aplicación del principio in dubio pro reo, ya citados, o en aquellos en los que la medida privativa de la libertad es diferente de la detención preventiva, verbigracia, la caución prendaria¹¹– frente a supuestos ocurridos aún en vigencia de dicha disposición, como, más significativo aún, también con el fin de apartarse de interpretaciones restrictivas de la mencionada cláusula general de responsabilidad estatal, como la prohijada por la Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1996 o la que pudiera derivarse de una hermenéutica restringida en relación con los artículos 65 y siguientes de la Ley 270 de 1996.*

⁷ Sentencia del 12 de diciembre de 1996, exp. 10.229.

⁸ Sentencia de 4 de abril de 2002, exp. 13.606.

⁹ Sentencia del 27 de septiembre de 2000, exp. 11.601; sentencia del 25 de enero de 2001, exp. 11.413.

¹⁰ Sentencia del 2 de mayo de 2007, exp. 15.463.

¹¹ En este sentido, la Sala ha sostenido lo siguiente:

“La garantía a los derechos de libertad consignada en el artículo 90 C.P. en consonancia con otros mandatos fundamentales no puede verse reducida a la detención injusta, pues ello implicaría que muchas situaciones fuente de responsabilidad estatal no fueran objeto de indemnización en abierto desconocimiento de dicha preceptiva constitucional.

En otros términos, la regulación prevista en el citado artículo 414 del entonces vigente Código de Procedimiento Penal a pesar de estar dirigida concretamente a normativizar los casos de detención injusta, sirve también como parámetro para definir la injusticia de otras medidas de cautela adoptadas dentro del trámite del juicio penal, y que igualmente pueden desencadenar la causación de un daño que se revela antijurídico ante la falta de responsabilidad del implicado, derivada de que no cometió el hecho, o de que el hecho no era delito, o de que el hecho no existió, daños que merecen la tutela jurídica del ordenamiento, tal y como lo ordena el artículo 90 Constitucional arriba analizado”. Cfr. Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sentencia del 6 de marzo de 2008; Consejera ponente: Ruth Stella Correa Palacio; Radicación número: 73001-23-31-000-1997-05503-01(16075); Actor: Alvaro Delgado Cruz; Demandado: Nación-Consejo Superior de la Judicatura-Fiscalía General de la Nación.



A este respecto y aún cuando los hechos materia del presente litigio acaecieron con anterioridad a la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1996 —razón por la cual dicho cuerpo normativo no resulta aplicable al asunto sub lite—, conviene recordar que el artículo 68 ídem se ocupa de regular la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad al disponer que “[Q]uien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios” y que la Corte Constitucional, en la mencionada sentencia C-037 de 1996, expresó, para declarar la exequibilidad del referido precepto, que “el término “injustamente” se refiere a una actuación abiertamente desproporcionada y violatoria de los procedimientos legales, de forma tal que se torne evidente que la privación de la libertad no ha sido ni apropiada, ni razonada ni conforme a derecho, sino abiertamente arbitraria”.

Sin embargo, la Sección Tercera del Consejo de Estado ha considerado que la transcrita interpretación respecto de los alcances del artículo 68 de la Ley 270 de 1996 podría conducir a entender que la referida norma estatutaria habría restringido el ámbito de posibilidades dentro de las cuales resultaría viable declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención ordenada por autoridad judicial dentro de una investigación penal, para circunscribirlo a los supuestos en los que se acredite una falla del servicio público de Administración de Justicia, pero además no una falla de cualquier índole, sino una acompañada de las características descritas por la Corte Constitucional en el apartado precedentemente traído a colación.

Por tal razón, la Sección Tercera de esta Corporación entendió entonces y ahora reitera, que semejante conclusión no consulta la obligación del intérprete de buscar el sentido de las disposiciones no de forma aislada e inconexa, sino en el conjunto tanto del cuerpo normativo en el cual se insertan, como en el de la totalidad del ordenamiento jurídico y, en especial, poniéndolas en contacto con aquellos preceptos de la Carta Política que no pueden soslayarse al momento de precisar su contenido y alcance, motivo por el cual “mal podría identificarse el significado del artículo 68 de la Ley 270 de 1996, prescindiendo de una hermenéutica sistemática con las demás normas de la misma Ley Estatutaria que regulan el objeto al cual ella se refiere o, peor aún, omitiendo conectarla con el artículo 90 constitucional, piedra angular del régimen de responsabilidad del Estado operante en Colombia desde que rige la Carta Política de 1991”¹², precepto superior éste que, del mismo modo en que lo hace el artículo 65 de la Ley 270 en mención¹³,

“... no introduce limitación o condicionamiento alguno encaminado a impedir el juzgamiento o la declaratoria de responsabilidad extracontractual del Estado como consecuencia de la actividad de la Administración de Justicia, distinto de la causación de un daño antijurídico. No podía preverlo, por lo demás, como quiera que con ello conculcaría la regulación efectuada por el artículo 90 de la Carta, que igualmente constituye el concepto de “daño antijurídico”, en el elemento central cuya concurrencia debe evidenciarse para que proceda el reconocimiento de la responsabilidad estatal —siempre, claro está, que ese daño pueda imputarse jurídicamente a una autoridad pública—”¹⁴.

¹² Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2.007; Radicación No.: 20001-23-31-000-3423-01; Expediente No. 15.463; Actor: Adielia Molina Torres y otros; Demandado: Nación – Rama Judicial.

¹³ De acuerdo con el cual “el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales”.

¹⁴ Cfr. Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2.007; Radicación No.: 20001-23-31-000-3423-01; Expediente No. 15.463, antes citada. En el mencionado pronunciamiento se pone de presente, además, cómo también la propia Corte Constitucional, de manera que no deja de resultar algo paradójica —pues lo afirma en la misma sentencia C-037 de 1996 aludida—, subraya que los alcances del artículo 90 de la Constitución Política no pueden ser restringidos por una disposición legal:

“Este es, por lo demás, el entendimiento de la propia Corte Constitucional que, al valorar si el proyecto del referido artículo 65 de la Ley 270 de 1996 se avenía o no al Ordenamiento Fundamental, sostuvo que “el inciso primero del presente artículo es exequible, pues si bien sólo hace alusión a la responsabilidad del Estado —a través de sus agentes judiciales— por falla en el servicio, ello no excluye, ni podría excluir, la aplicación del artículo 90 superior en los casos de la administración de justicia”, añadiendo, a continuación, que

“...el principio contemplado en el artículo superior citado, según el cual todo daño antijurídico del Estado —sin importar sus características— ocasiona la consecuente reparación patrimonial, en ningún caso puede ser limitado por una norma de inferior jerarquía, como es el caso de una ley estatutaria. Ello, en vez de



No resulta constitucionalmente viable ni argumentativamente plausible, en consecuencia, sostener que un precepto contenido en un Decreto con fuerza de ley —como el 2700 de 1991, concretamente en su artículo 414— y ni siquiera en una ley estatutaria, puedan contar con la virtualidad de restringir los alcances que a la responsabilidad del Estado le vienen determinados desde el artículo 90 de la Carta Política, pues según tanto el Consejo de Estado como la Corte Constitucional lo han señalado, los parámetros a los cuales se ciñe la responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas son los estructurados en el citado artículo 90 constitucional, los cuales bien podrían ser precisados, **mas no limitados**, por un dispositivo normativo infraconstitucional¹⁵; en otros términos y “[E]n definitiva, no resultan compatibles con el artículo 90 de la Constitución, interpretaciones de normas infraconstitucionales que restrinjan la cláusula general de responsabilidad que aquél contiene”¹⁶, por consiguiente, ni el artículo 414 del Decreto 2700 de 1991 ni el artículo 68 de la Ley 270 de 1996, constituyen fundamento único de la responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad. Tales disposiciones legales precisan, pero de ninguna manera limitan y menos reemplazan la eficacia directa, vinculante y preferente de los contenidos que respecto de la misma materia se desprenden del aludido artículo 90 supremo.

IMPUTACIÓN DEL DAÑO

Es de manifestar, que si bien el papel del Juez de Control de Garantías es velar por el respecto al debido proceso dentro de la actuación penal, como de bridar las garantías a las partes, antes de tomar la decisión de imponer medida de aseguramiento al actor, este debió de hacer un estudio de las pruebas que aportaba la Fiscalía General de la Nación cuando la formulación de imputación que se hace era tan efímera que no permitía establecer una responsabilidad en los

acarrear la inexequibilidad del precepto, obliga a una interpretación más amplia que, se insiste, no descarta la vigencia y la aplicación del artículo 90 de la Carta Política” (destaca la Sala)”.

¹⁵ La jurisprudencia de la Corte Constitucional, por lo demás, así lo explicitó, de manera rotunda, en pronunciamiento posterior a la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996 —sentencia C-333 del 1º de agosto de 1996, Magistrado ponente: Alejandro Martínez Caballero—, en el cual dejó claro que, frente a las previsiones legales que regulen la responsabilidad del Estado, siempre puede —y debe— ser aplicado, directamente —cuando sea necesario—, el artículo 90 de la Constitución, como pilar fundamental del régimen colombiano de responsabilidad patrimonial de las autoridades públicas. Las disposiciones contenidas en normas infraconstitucionales que regulen la materia no excluyen, por tanto, la posibilidad —que es, al mismo tiempo, obligación— de que el juez de lo Contencioso Administrativo aplique todos los regímenes de responsabilidad que encuentren arraigo directo en el artículo 90 constitucional, en todos los casos, asimismo, encuadrables directamente en el tantas veces referido mandato superior:

“En tales circunstancias, y conforme a todo lo anterior, se concluye que frente a la norma impugnada [que lo era el artículo 50 de la ley 80 de 1993, de conformidad con el cual “Las entidades responderán por las actuaciones, abstenciones, hechos y omisiones antijurídicos que les sean imputables y que causen perjuicio a sus contratistas”] son totalmente pertinentes las reflexiones efectuadas por la Corte al declarar la exequibilidad del artículo 65 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia.

(...)

Por todo lo anterior, la Corte considera que la expresión acusada no vulnera en sí misma la Constitución, siempre y cuando se entienda que ella no excluye la aplicación directa del artículo 90 de la Carta al ámbito contractual. En cambio, la disposición impugnada puede generar situaciones inconstitucionales si se concluye que el artículo 50 de la Ley 80 de 1993 es el único fundamento de la responsabilidad patrimonial del Estado en materia contractual, por cuanto ello implicaría una ilegítima restricción del alcance del artículo 90 que, como se ha visto, consagra una cláusula general de responsabilidad que engloba los distintos regímenes en la materia. Por ello la Corte declarará la citada expresión exequible, pero de manera condicionada, pues precisará que el artículo 50 de la Ley 80 de 1993 no constituye el fundamento único de la responsabilidad patrimonial del Estado en el campo contractual, por lo cual el artículo 90 de la Constitución es directamente aplicable en este campo” (se deja destacado).

¹⁶ Cfr. Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2.007; Radicación No.: 20001-23-31-000-3423-01; Expediente No. 15.463, antes citada. En el mismo sentido, puede verse la sentencia, también de la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, del 5 de diciembre de 2007; Consejero ponente: Ramiro Saavedra Becerra; Radicación número: 25000-23-26-000-1995-00767-01(15128); Actor: Carlos Eugenio Ortega Villalba.



OSCAR EDUARDO GARCÍA GALLEGO

Abogado

Derecho Público

delitos que acusaba, pues las entrevistas traídas como pruebas a dicha diligencia no permiten inferir responsabilidad acerca del momento de los hechos o si fueron testigos presenciales de la presunta conducta cometida por el actor, que en ultimas le traería graves consecuencias al demandante Angulo Acebedo, como lo fue estar privado de su libertad por más de seis meses sin haber cometido el ilícito por el cual fue procesado.

Igualmente, se evidencia responsabilidad de la Fiscalía General de la Nación en iniciar el ejercicio de la Acción Penal, sin tener la certeza de posible comisión de los ilícitos por los cuales acuso al actor, sino presuntas hipótesis de un hecho, situación que criticó duramente la Juez de instancia al momento de dar el sentido del fallo dentro del proceso penal, pues como se plasmó, los presuntos testigos de los hechos de los cuales saliera victima Liceth Valentina Cueno Gómez, nunca presenciaron el hecho, y como bien se demostró en el trámite del Juicio Oral, el actor no estuvo en dicho lugar, pues se encontraba departiendo con sus amigos al otro lado de la ciudad, situación que bien se materializo al dar la libertad inmediata al señor LEONEL SANTO ANGULO ACEBEDO.

Consideraciones anteriores que nuevamente fueron reiteradas por la Juzgadora de Instancia en la sentencia que declarara no responsable al demandante de los delitos por los cuales la titular de la acción penal había acusado, pues como bien se adujo en dicha providencia, desde el comienzo mismo de la investigación las entrevistas tomadas a los testigos del hecho no tenían correlación lo que decanto un pésima investigación sobre el posible autor de las lesiones causadas a la señorita Cueno Gómez.

Por lo que desde este punto de vista, tanto la Nación – Rama Judicial, como la Nación- Fiscalía General de la Nación son responsables de los perjuicios materiales e inmateriales sufridos por el actor y sus familiares con ocasión a la privación injusta de la libertad.

En este orden de ideas, se solicita al Juez de instancia declarar la responsabilidad administrativa de las entidades demandadas por la privación injusta de que fue objeto el actor, por los perjuicios de índole material y los de índole moral no solo ocasionados a este, sino también a sus familiares quienes vivieron la zozobra de no tener un ser querido durante más de seis (6) meses y el tener que sopesar las cargas propias de la estadía en una cárcel, cuando no estaba obligada a hacerlo.

OPORTUNIDAD DE LA ACCIÓN

Me encuentro dentro del término de Ley para instaurar la presente demanda, toda vez que la decisión por la cual se configuro el daño del actor referido a absolución del proceso penal fue proferida el 16 de diciembre de 2014, es decir dentro del término de dos años a que se contrae el artículo 164 del CPACA.

PRETENSIONES

Con base en los hechos y fundamentos de derecho antes descritos, en las pruebas que se solicitan, anexan y lo que se demuestre dentro del proceso solicito:



OSCAR EDUARDO GARCÍA GALLEGO

Abogado
Derecho Público

PRIMERA: Declarar que LA NACIÓN - RAMA JUDICIAL y NACIÓN - FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN, son administrativamente responsables por los daños causados a los demandantes por la privación injusta de la libertad de que fue objeto el señor LEONEL SANTO ANGULO ACEBEDO.

SEGUNDO: Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene a pagar a los demandados y a favor de los demandantes, los siguientes perjuicios materiales e inmateriales, y los demás perjuicios que se puedan deducir de los hechos probados en el proceso:

A) PERJUICIOS MORALES:

Mis representados solicitan el reconocimiento de perjuicios morales ocasionados por la privación injusta de la libertad de que fue víctima LEONEL SANTO ANGULO ACEBEDO, toda vez que sufrieron tristeza, amargura, angustia y desesperación con ocasión a la decisión de la administración de ejecutar una medida de aseguramiento en contra de quien no debía de soportarla.

Al respecto de este perjuicio, por parte del Consejo de Estado en sentencia de Unificación- Exp. 25022 de 28 de agosto de 2013, se decantó, que si bien el mismo se presume para los familiares del núcleo primario, atendiendo el tiempo que dure la privación de la libertad, se han establecido unos topes referidos igualmente a la relación de consanguinidad del actor, el demandante no solo se perjudico a causa de la privación de la libertad de que fue objeto en un establecimiento carcelario, sino también, la afectación que tuvo a causa del rechazo de la sociedad a causa de haber sido vinculado a un ilícito de tanta trascendencia, afectando su imagen.

Así las cosas, se solicitan como perjuicios morales:

INDEMNIZACIÓN SOLICITADA EN SMLMV	PERSONA A LA QUE SE LE DEBE RECONOCER	PARENTESCO
70	LEONEL SANTO ANGULO ACEBEDO	Perjudicado
70	MAURICIO ANGULO PALACIOS	Hijo
70	LEONEL ANGULO PALACIOS	Hijo
70	NURYS TIQUE CARDOZO	Compañera
70	MARIA JUDITH ACEVEDO DE ANGULO	Madre
70	ESPIRITU SANTO ANGULO POTES	Padre
70	HAROLD ANGULO ACEVEDO	Hermano
70	JACQUELINE ANGULO VIVAS	Hermana

TOTAL PERJUICIOS MORALES: 560 Salarios Mínimos Legales Mensuales Vigentes

B) PERJUICIOS MATERIALES

DAÑO EMERGENTE.- Que lo constituye la disminución real y cierta del patrimonio de los demandantes y está representado en los gastos que tuvo que realizar la demandante con ocasión de la privación injusta de su libertad.



OSCAR EDUARDO GARCÍA GALLEGO

Abogado

Derecho Público

Como daño emergente se deberá reconocer entonces al demandante LEONEL SANTO ANGULO ACEBEDO, las sumas canceladas por concepto de honorarios a los abogados que llevaron su proceso en diversas etapas como lo cancelado por honorarios a los investigadores privados que recolectaron las pruebas en su defensa, **cuyo valor ascendió a los QUINCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 15.700.000.00)**

- Dr. Medardo Gutierrez Fontal (Audiencia Preliminar ante el Juez de Control de Garantías) \$ 1.200.000.00

- Dr. Oscar Emilio de Jesus Berajano Cobo (Audiencia de Acusación, Preparatoria, Juicio Oral y pago a los investigadores) \$ 14.500.000.00

TOTAL DAÑO EMERGENTE

\$ 15.700.000.00

LUCRO CESANTE:

INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIR DURANTE LA PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD.

Se le deberá reconocer al señor LEONEL SANTO ANGULO ACEBEDO, los ingresos dejados de percibir en el desempeño de su labor como conductor de volqueta que permitía el sostenimiento de su familia, desde que fue privado de la libertad hasta el momento en que recobro la libertad, para lo cual deberán tener en cuenta que su actividad le generaba para él y su familia un ingreso promedio de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$ 2.500.000.00).

Hechos: Duración de la privación injusta de la libertad:

6 meses y 19 días, desde el 20 de marzo de 2014 al 9 de octubre de 2014.

Salario base de la liquidación: = \$ 2.500.000

Tiempo Privado de la Libertad: $6.63 \times 2.500.000 = \$ 16.575.000$

LUCRO CESANTE FUTURO

La víctima LEONEL SANTO ANGULO ACEBEDO ejercía como motorista, pero con ocasión a la privación de su libertad, perdió contacto con las personas que lo contrataban para el transporte de material de río y escombros, del cual se generaban sus ingresos conduciendo la volqueta de su propiedad, por lo que al momento de expedirse la correspondiente boleta de libertad, tuvo que retomar nuevamente sus actividades y esto no fue de la noche a la mañana, por lo que deberá reconocerse un periodo de tiempo adicional por el término en que el demandante debió quedar cesante una vez le fue emitido el sentido de fallo absolutorio en el año 2014, el cual equivale de 35 semanas (8,75 meses), que



OSCAR EDUARDO GARCÍA GALLEGO

Abogado

Derecho Público

corresponde al tiempo que, en promedio, puede tardar una persona en edad económicamente activa para encontrar un nuevo puesto de trabajo en Colombia, en este caso, retomar las actividades comerciales, como lo ha considerado el Consejo de Estado ¹⁷, con fundamento en la información ofrecida por el observatorio laboral y ocupacional colombiano, a cargo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)¹⁸.

Salarios base de la liquidación: 616.000 más 25% prestaciones sociales = \$ 770.000

Tiempo para conseguir empleo: 8.75 x 770.000 = \$ 6.737.500

PERJUICIOS MATERIALES

INGRESOS DEJADOS DE PERCIBIR	\$ 16.575.000.00
HONORARIOS DE ABOGADO	\$ 15.700.000.00
TOTAL TIEMPO EN CONSEGUIR EMPLEO (victima)	\$ 6.737.500.00

TOTAL PERJUICIOS MATERIALES: \$39.012.500.00

TERCERO: Todas las condenas serán actualizadas al momento de proferirse el fallo y el mismo deberá ser cumplido de conformidad a lo establecido en el artículo 192 del CPACA.

CUARTO: Condenar en costas y agencias en derecho a las entidades demandadas de conformidad con lo establecido en el 188 del CPACA.

JURAMENTO ESTIMATORIO

Las anteriores pretensiones las formulo bajo la gravedad del juramento a instancias de mis mandantes y considero son estimadas razonablemente de acuerdo a los argumentos planteados. Lo anterior de conformidad con lo establecido el artículo 206 de la Ley 1564 de 2012, CODIGO GENERAL DEL PROCESO

PRUEBAS

¹⁷ Sección Tercera del Consejo de Estado Exp 27093

¹⁸ Uribe G., José Ignacio y Gómez R., Lina Maritza, Canales de búsqueda de empleo en el mercado laboral colombiano 2003, en *Serie Documentos Laborales y Ocupacionales*, N° 3, Observatorio Laboral y Ocupacional Colombiano, SENA-Dirección General de Empleo y Trabajo, Bogotá, junio de 2005, p. 22. Fuente citada por la Sala en sentencia de 4 de diciembre de 2006, exp. 13168, C.P. Mauricio Fajardo Gómez.



OSCAR EDUARDO GARCÍA GALLEGO

Abogado

Derecho Público

Para demostrar los hechos en que se fundamentara la demanda, solicito muy respetuosamente se tenga como pruebas los documentos que acompaño a la presente Demanda. Así

Documentales:

1. Registro civil de nacimiento del señor Leonel Santo Angulo Acebedo – 1 folio.
2. Registro civil de nacimiento del señor Mauricio Angulo Palacios – 1 folio.
3. Registro civil de nacimiento del señor Leonel Angulo Palacios - 1 folio.
4. Registro civil de nacimiento de la señora Jacqueline Angulo Vivas 1 folio.
5. Registro civil de nacimiento del señor Harold Angulo Acebedo – 1 folio
6. Acta No. 0343 de Declaración extra juicio sobre convivencia del señor Leonel Santo Angulo Acebedo y la señora Nurys Tique Cardozo de 3 de febrero de 2015 – 1 folio.
7. Certificado de libertad del actor expedido por el INPEC - 1 folio.
8. Copia de proceso penal, radicado con el número de noticia criminal 761116000165201302571 en contra del Demandante por la conducta punible de Tentativa de Homicidio (Juzgado Tercero Penal Municipal de Control de Garantías y Juzgado Segundo Penal del Circuito de Buga) – 150 folios.
9. Un (1) Cd de Audios del Proceso Penal radicado con el número de noticia criminal 761116000165201302571 en contra del Demandante por la conducta punible de Tentativa de Homicidio.
10. Un (1) DVD del Proceso Penal radicado con el número de noticia criminal 761116000165201302571 en contra del Demandante por la conducta punible de Tentativa de Homicidio.

Testimoniales:

Con el objeto de que declaren sobre los hechos y pretensiones de la demanda se solicita se decreten los testimonios de los señores:

- DIEGO CAÑAS, quien reside en el municipio de Buga, quien puede ser ubicado a través nuestro.
- LEONEL VARONA TRIANA, quien reside en el municipio de Buga, quien puede ser ubicado a través nuestro.
- GUILLERMO DUQUE, quien reside en el municipio de Buga, quien puede ser ubicado a través nuestro.
- RUBEN DARIO COLLAZOS, quien reside en el municipio de Buga, quien puede ser ubicado a través nuestro.
- HECTOR FABIO VARGAS, quien reside en el municipio de Buga, quien puede ser ubicado a través nuestro.
- JULIO CESAR ALFONSO, quien reside en el municipio de Buga, quien puede ser ubicado a través nuestro.
- JUAN BAUTISTA TORRES, quien reside en el municipio de Buga, quien puede ser ubicado a través nuestro.

Personas que de manera concretan depondrán sobre la afectación de las relaciones de convivencia y cercanía entre el demandante principal y su familia,

Carrera 14 No. 4-80 Oficina 11 - Celular 3182915384

Guadalajara de Buga

E-mail: oscar_garcia_84@hotmail.com



OSCAR EDUARDO GARCÍA GALLEGO

Abogado

Derecho Público

como también, los perjuicios morales y materiales sufridos por estos con ocasión a la privación injusta de que fue objeto LEONEL SANTO ANGULO ACEBEDO.

CUANTÍA

La cuantía de la presente DEMANDA DE REPARACION DIRECTA de conformidad con lo establecido en el artículo 157 del CPACA, se toma teniendo en cuenta la pretensión material mayor sin tomar en cuenta los perjuicios morales, la cual equivale a valor de **DIECISIÉS MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS M/CTE (\$ 16.575.000.00).**

COMPETENCIA

Es competencia de ese Honorable despacho, por naturaleza del medio de control, por razón a la autoridad que emitió la decisión donde se decantó depurado el daño sufrido por el actor (Sentencia Absolutoria).

ANEXOS

Adjunto al presente escrito, El poder suscrito por los demandantes, los documentos aducidos en el acápite de pruebas, constancia de agotamiento del requisito de procedibilidad expedida por el agente del Ministerio Público, copia de la demanda en CD, y las correspondientes copias físicas de la demanda para los traslados a las partes.

NOTIFICACIONES

LOS DEMANDADOS:

- NACIÓN – FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Edificio San Francisco ubicado en la Calle 25 N No. 6 A- 11 de la ciudad de Cali - Valle.
- NACIÓN - RAMA JUDICIAL: Palacio de Justicia "Pedro Elias Serrano", ubicado en la Carrera 10 No. 12-15 Piso 17 de la ciudad de Cali - Valle.

LOS VINCULADOS

- AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL ESTADO: Calle 70 N° 4 – 60 de la ciudad de Bogotá, Teléfonos 2558955, Extensiones 406, 407 y 409
- MINISTERIO PÚBLICO: Procuraduría 60 Judicial I Para Asuntos Administrativos De Cali.

LOS DEMANDANTES

- El Señor LEONEL SANTO ANGULO ACEBEDO y los demás demandantes a través nuestro.



OSCAR EDUARDO GARCÍA GALLEGO

**Abogado
Derecho Público**

A los suscritos apoderados, en la Carrera 14 No. 4-80 oficinas 10 y 11 de Buga – Valle. Buzón electrónico: oscar_garcia_84@hotmail.com y catherinemejia@hotmail.com. Celular: 3182915384.

Cordialmente,

OSCAR EDUARDO GARCÍA GALLEGO

C.C. No 14.799.840 de Tuluá

T.P. No. 174.532 del C.S.J.

CATHERINE MEJIA BEDOYA

C.C. No. 1.115.064.933 de Buga

T.P. No. 211.561 del C.S.J